

AUTO No. 02613

“POR EL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En cumplimiento de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, el Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de 1974, en armonía con lo establecido en el Decreto 948 de 5 de junio de 1995, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, la Resolución 627 de 7 de abril de 2006, Resolución 6919 de 19 de octubre de 2010 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente, la Ley 1333 de 21 de julio 2009, el Decreto 01 de 02 de enero de 1984 Código Contencioso Administrativo en armonía con la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y las facultades conferidas por la Resolución 1037 del 28 de julio de 2016 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que la Secretaría Distrital de Ambiente, en uso de las funciones conferidas por el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio de las cuales le corresponde ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en el Distrito Capital de Bogotá y en atención al radicado No. 2013ER072217 del 19 de junio de 2013, realizó visita técnica de inspección el día 05 de julio de 2013, al establecimiento de comercio denominado **EL CASTILLO SALSA BAR**, con matrícula mercantil No. 0002308582 del 03 de abril de 2013, ubicado en la carrera 78 No. 7 A- 97 de la localidad de Kennedy de esta ciudad, emitiendo el acta/requerimiento N°. 2295 de 05 de julio de 2013, en el cual se requirió al propietario del establecimiento para que en el término de treinta (30) días calendario, diera cumplimiento a los parámetros de emisión de ruido establecidos en la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006.

Que esta Entidad, con el fin de realizar seguimiento al acta de requerimiento precitada y atender el radicado N° 2013ER088560 del 18 de julio de 2013, realizó visita técnica de seguimiento el día 09 de noviembre de 2013, al establecimiento de comercio denominado **EL CASTILLO SALSA BAR**, emitiendo el Concepto Técnico No. 09156 de 28 de noviembre de 2013, en el cual se estableció que incumple presuntamente con los niveles de presión sonora establecidos por la Resolución 0627 de 2006.

Página 1 de 9

AUTO No. 02613

Que mediante Auto No. 03558 del 20 de diciembre de 2013, expedido por Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), se dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental en contra de los Señores **ANA CRISTINA GARZON MARTINEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 44.158.620 y **GUSTAVO BONILLA PALACIOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.826.649, en calidad de propietarios del establecimiento de comercio denominado **EL CASTILLO SALSA BAR**, registrado con matrícula mercantil No. 0002308582 del 03 de abril de 2013, ubicado en la carrera 78 No. 7 A - 97, de la localidad de Kennedy de esta ciudad, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción ambiental, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente Acto Administrativo.”

Que el Auto No. 03558 del 20 de diciembre de 2013 fue publicado en el boletín legal de la Secretaría Distrital de Ambiente el día 05 de febrero de 2015, comunicado al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios mediante radicado N° 2014EE022773 del 11 de febrero de 2014 y notificado por aviso el día 24 de enero de 2014, con constancia de ejecutoria del día 27 de enero del mismo año.

Que a través del Auto No. 03104 del 06 de junio de 2014, expedido por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, se dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO: Formular pliego de cargos, en contra de los Señores **ANA CRISTINA GARZON MARTINEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 44.158.620 y **GUSTAVO BONILLA PALACIOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.826.649, en su calidad de propietarios del establecimiento de comercio denominado **EL CASTILLO SALSA BAR**, registrado con matrícula mercantil No. 0002308582 del 03 de abril de 2013, ubicado en la carrera 78 No. 7 A - 97, de la localidad de Kennedy de esta ciudad, los siguientes cargos a título de Dolo conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo:

Cargo Primero: Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una zona residencial de Tranquilidad y Ruido Moderado en un horario nocturno, generados mediante el empleo de cuatro parlantes, dos brillos y una consola, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del Artículo Noveno de la Resolución 0627 de 2006.

Cargo Segundo: Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según se establece en el Artículo 45 del Decreto 948 de 1995.”

Que el anterior auto fue notificado por edicto el día 21 de octubre de 2015, con constancia de ejecutoria del día 22 de octubre del mismo año.

AUTO No. 02613

Que la señora **ANA CRISTINA GARZON MARTINEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 44.158.620 y el señor **GUSTAVO BONILLA PALACIOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.826.649, no presentaron escrito de descargos ni solicitud de pruebas contra el Auto No. 03104 del 06 de junio de 2014.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Consideraciones Generales:

Que durante la etapa probatoria, se pretende obtener los elementos necesarios que proporcionen la efectiva consecución de la certeza respecto de los hechos objeto de debate.

Que dichos elementos probatorios, deben ser conducentes, pertinentes y útiles, toda vez que los hechos articulados en el proceso, los que constituyen el tema a probar, deben tener incidencia sobre lo que se va a concluir en éste.

Del caso en concreto:

Que desde el punto de vista procedimental, se tiene en cuenta que con base en lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad Ambiental está investida de la facultad para decretar la práctica de las pruebas consideradas de interés para el procedimiento Sancionatorio de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y utilidad.

Que el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, señala que en las actuaciones sancionatorias ambientales, las notificaciones se surtirán en los términos del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que en lo concerniente a las pruebas obrantes en el expediente No. SDA-08-2013-3204, perteneciente al procedimiento sancionatorio adelantado contra los propietarios del establecimiento de comercio denominado **EL CASTILLO SALSA BAR**, con matrícula mercantil No. 0002308582 del 03 de abril de 2013, ubicado en la carrera 78 No. 7 A- 97 de la localidad de Kennedy de esta ciudad, es procedente hacer un análisis del concepto de la prueba y sus requisitos.

Que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado¹, la prueba debe ser entendida:

"En primer lugar debe precisarse que la prueba ha sido definida por diversos autores de la siguiente manera: Para Bentham, después de sostener que la palabra prueba

¹ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección "A" CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, del 20 de septiembre de 2007, Radicación 25000-23-25-000-2004-05226-01(0864-07).

AUTO No. 02613

tiene algo de falaz, concluye que no debe entenderse por ella sino un medio del que nos servimos para establecer la verdad de un hecho, medio que puede ser bueno o malo, completo o incompleto; por su parte para Ricci "la prueba no es un fin por sí mismo, sino un medio dirigido a la consecución de un fin, que consiste en el descubrimiento de la verdad" y agrega que "antes de emplear un medio para conseguir el fin que se persigue es de rigor convencerse de la idoneidad del medio mismo; de otra suerte se corre el riesgo de no descubrir la verdad que se busca" y por último Framarino anota en su "Lógica de las pruebas en materia Criminal" que la finalidad suprema y sustancial de la prueba es la comprobación de la verdad y que la prueba es el medio objetivo a través del cual la verdad logra penetrar en el espíritu.

De conformidad con lo anterior, es claro que por valoración o evaluación de la prueba debe entenderse el conjunto de operaciones mentales que debe cumplir el juez al momento de proferir su decisión de fondo para conocer el mérito o valor de convicción de un medio o conjunto de medios probatorios. El artículo 168 del C.C.A. prevé que en los procesos que se surtan ante esta jurisdicción, se aplican las normas del Código de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración, siempre que resulten compatibles con las normas del C.C.A. marginalmente (...)"

Que el Consejo de Estado², en providencia del 19 de agosto de 2010, se refirió de la siguiente manera frente a la noción de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad de las pruebas:

"El artículo 168 del C.C.A. señala que en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 178 del C. de P.C. dispone: "Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas".

De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.

Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio

² Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, CP Hugo Fernando Batidas Barcenás, del 19 de Agosto de 2010, Radicación 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093)

AUTO No. 02613

propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley.”

Con base a la anterior definición, es necesario señalar lo que el Código General del Proceso determina en cuanto a las pruebas:

1. Que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, esto es la necesidad de la prueba (Art. 164 del C.G.P.)
2. Que sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (Art. 165 del C.G.P.)
3. Que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba (Art. 167 del C. G P.).
4. Que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará *in limine* las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas (Art. 168 del C. G P.)

De acuerdo a lo anteriormente expresado, tenemos que las pruebas son un medio de verificación de las afirmaciones y hechos que formulan las partes dentro de un proceso, con el fin de otorgarle al juez las pautas necesarias para tomar una decisión.

Aunado a lo anterior, se tiene que no sólo se necesita allegar oportunamente las pruebas que se pretende hacer valer dentro del proceso, sino que estas deben ser congruentes con el objeto del mismo, igualmente éstas deben cumplir con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad.

En cuanto al concepto de conducencia, nos referimos a la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar un hecho determinado, es decir, que la práctica de la prueba es permitida por la ley como elemento demostrativo de algún hecho o algún tipo de responsabilidad; la pertinencia es la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada, y la utilidad se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente.

AUTO No. 02613

Que en virtud de lo establecido en el Artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo cual indica que respecto al régimen probatorio se tienen en cuenta las disposiciones generales contenidas en el Artículo 164 y siguientes del Código General del Proceso.

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código General del Proceso, por lo tanto a la luz de lo establecido en el Artículo 165 de dicho Estatuto, las pruebas documentales aportadas y solicitadas tener en cuenta son útiles para la formación del convencimiento de la autoridad con jurisdicción y competencia para decidir.

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 164 del Código General del Proceso, relacionado con la necesidad de la prueba toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

Que el artículo 169 del Código General del Proceso establece que, *“...Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte, o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes...”*

Que para el caso que nos ocupa, la señora **ANA CRISTINA GARZON MARTINEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 44.158.620 y el señor **GUSTAVO BONILLA PALACIOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.826.649, no presentaron escrito de descargos ni solicitud de pruebas contra el Auto No. 03104 del 06 de junio de 2014, siendo esta la oportunidad procesal con que contaban para aportar y/o solicitar la práctica de pruebas que estimaran conducentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, es por ello que esta autoridad ambiental determina que no existen pruebas por decretar a solicitud de los presuntos infractores en mención.

Que así mismo, ésta Secretaría se dispondrá abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra la señora **ANA CRISTINA GARZON MARTINEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 44.158.620 y el señor **GUSTAVO BONILLA PALACIOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.826.649, en su calidad de propietarios del establecimiento de comercio denominado **EL CASTILLO SALSA BAR**, con matrícula mercantil No. 0002308582 del 03 de abril de 2013, ubicado en la carrera 78 No. 7 A- 97 de la localidad de Kennedy de esta ciudad, decretando las que considera la Entidad conducentes, pertinentes y útiles, para el presente caso;

- 1) Los radicados Nos. 2013ER072217 del 19 de junio de 2013 y 2013ER088560 del 18 de julio de 2013 con los cuales se pusieron en conocimiento de esta Entidad la

AUTO No. 02613

existencia de una posible perturbación ambiental en materia de ruido del establecimiento de comercio denominado **EL CASTILLO SALSA BAR**, con matrícula mercantil No. 0002308582 del 03 de abril de 2013, ubicado en la carrera 78 No. 7 A- 97 de la localidad de Kennedy de esta ciudad.

- 2) El acta/requerimiento N°. 2295 de fecha 05 de julio de 2013 con el cual se requirió a los presuntos infractores para que dieran cumplimiento a la normatividad ambiental en el término de 30 días calendario.
- 3) El concepto técnico No. 09156 de 28 de noviembre de 2013 con sus anexos, los cuales concluyen el incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, con un Leq emisión de 69.18 dB(A) en una zona residencial en horario nocturno.

COMPETENCIA DE ESTA SECRETARIA

Que es función de la Secretaría Distrital de Ambiente, controlar el cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, en consecuencia emprender las acciones de policía que sean pertinentes, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las mencionadas normas.

Que el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Secretaría para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que así mismo, el numeral 12° ibídem establece como función a la Autoridad Ambiental:

“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos”.

Que el artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

AUTO No. 02613

Que de conformidad con lo contemplado en el numeral 1, artículo 1° de la Resolución 01037 del 28 de julio de 2016, el Secretario Distrital de Ambiente delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

“1. Expedir los actos administrativos de impulso relacionados con los procesos sancionatorios. (...)”

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Abrir a pruebas dentro del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Entidad mediante el Auto No. 03558 del 20 de diciembre de 2013, en contra de la señora **ANA CRISTINA GARZON MARTINEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 44.158.620 y el señor **GUSTAVO BONILLA PALACIOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.826.649, en calidad de propietarios del establecimiento de comercio denominado **EL CASTILLO SALSA BAR**, con matrícula mercantil No. 0002308582 del 03 de abril de 2013, ubicado en la carrera 78 No. 7 A- 97 de la localidad de Kennedy de esta ciudad.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como pruebas dentro del procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes; los radicados Nos. 2013ER072217 del 19 de junio de 2013 y 2013ER088560 del 18 de julio de 2013, el Acta/requerimiento N°. 2295 de fecha 05 de julio de 2013 y el Concepto técnico No. 09156 de 28 de noviembre de 2013 con sus anexos, correspondientes al establecimiento de comercio denominado **EL CASTILLO SALSA BAR**, por ser pertinentes, útiles y conducentes al esclarecimiento de los hechos, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora **ANA CRISTINA GARZON MARTINEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 44.158.620 y el señor **GUSTAVO BONILLA PALACIOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.826.649, en su calidad de propietarios del establecimiento de comercio denominado **EL CASTILLO SALSA BAR**, en la carrera 78 No. 7 A- 97 de la localidad de Kennedy de esta ciudad, según lo establecido en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo.- Los propietarios del establecimiento de comercio **EL CASTILLO SALSA BAR**, señora **ANA CRISTINA GARZON MARTINEZ** y señor **GUSTAVO BONILLA PALACIOS**, deberán presentar al momento de la notificación, certificado de matrícula del establecimiento de comercio, o documento idóneo que lo acredite como tal.

AUTO No. 02613

ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los 19 días del mes de diciembre del 2016



**OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

Expediente: SDA-08-2013-3204

Elaboró:

OLGA ELENA MENDOZA NAVARRO	C.C:	44157549	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 146 DE 2015 CESION DE CONTRATO	FECHA EJECUCION:	21/11/2016
----------------------------	------	----------	------	-----	------	--------------------------------------------------	---------------------	------------

Revisó:

OSCAR ALEXANDER DUCUARA FALLA	C.C:	79842782	T.P:	N/A	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	29/11/2016
-------------------------------	------	----------	------	-----	------	-------------	---------------------	------------

AMPARO TORNEROS TORRES	C.C:	51608483	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20160776 DE 2016	FECHA EJECUCION:	02/12/2016
------------------------	------	----------	------	-----	------	---------------------------------	---------------------	------------

ALETHYA CAROLINA CUBEROS VESGA	C.C:	1073230381	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20160536 DE 2016	FECHA EJECUCION:	06/12/2016
--------------------------------	------	------------	------	-----	------	---------------------------------	---------------------	------------

MARIA CATALINA SANTANA HERNANDEZ	C.C:	1019012336	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20160785 DE 2016	FECHA EJECUCION:	01/12/2016
----------------------------------	------	------------	------	-----	------	---------------------------------	---------------------	------------

AMPARO TORNEROS TORRES	C.C:	51608483	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20160776 DE 2016	FECHA EJECUCION:	10/12/2016
------------------------	------	----------	------	-----	------	---------------------------------	---------------------	------------

NELFY ASTRID BARRETO LOZADA	C.C:	53135005	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20160582 DE 2016 CESION DE	FECHA EJECUCION:	24/11/2016
-----------------------------	------	----------	------	-----	------	----------------------------------------------	---------------------	------------

Aprobó:

AMPARO TORNEROS TORRES	C.C:	51608483	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20160776 DE 2016	FECHA EJECUCION:	10/12/2016
------------------------	------	----------	------	-----	------	---------------------------------	---------------------	------------

Firmó:

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA	C.C:	11189486	T.P:	N/A	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	19/12/2016
----------------------------	------	----------	------	-----	------	-------------	---------------------	------------